

**AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE HUELVA**  
**QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA**

**Recurso contencioso-administrativo y solicitud de medidas  
cautelarísimas**

**D. ALFONSO PADILLA DE LA CORTE**, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la **MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA**, según representación que se acredita mediante copia de poder general para pleitos que se acompaña como **DOC. 1**, actuando bajo la dirección letrada de D<sup>a</sup> Mercedes Izquierdo Barragán, Colegiada como ejerciente con núm. 11.766 del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, comparece y, como mejor proceda en Derecho, respetuosamente, **DICE**:

**I.-** Que por medio del presente escrito, al amparo de los artículos 45, 46, 129 y 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA, en adelante), y siguiendo instrucciones de mi representada se interpone, en su nombre y representación, **RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra el apartado tercero del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de fecha 21 de noviembre de 2011**, que inicia el procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, por el que se adoptaron determinadas resoluciones en relación con la permanencia del Municipio en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, se efectúan aportaciones extraordinarias al capital social de GIAHSA y se faculta a la Alcaldía a otorgar una concesión demanial a GIAHSA de los bienes, infraestructuras, instalaciones y redes afectas al servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como todas aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua

**(DOC. 2) y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELARÍSIMA DE SUSPENSIÓN del acuerdo impugnado.**

**II.-** Que dicho apartado tercero del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de 21 de noviembre de 2011, ordena, al amparo del artículo 104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), la suspensión de la ejecución y efectos del Acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, decretando la recuperación *"por los medios técnicos, jurídicos y personales propios del Ayuntamiento de Valverde del Camino que resulten necesarios, el servicio y los bienes, infraestructuras, instalaciones y redes afectas al servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como todas aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua, así como el servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos"*.

Dicho acuerdo constituye un acto de trámite cualificado, susceptible de ser impugnado directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa por cuanto produce indefensión y perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos de mi mandante conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LRJPAC y 25.1 de la LJCA; y agota la vía administrativa (artículos 109.1.c de la LRJPAC y 52 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local).

En relación con los actos de trámite cualificados, es decir, susceptibles de ser impugnados en vía administrativa y contencioso-administrativa de manera autónoma, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª, de 7 de octubre de 2002 (RJ 2002/9364), sostuvo:

*"La doctrina sobre los actos de trámite atribuye este carácter a los que preparan y hacen posible la decisión, dirigiéndose al mayor acierto de ésta, frente a las resoluciones que deciden las cuestiones planteadas, que se califican como actos definitivos. A estos últimos se asimilan los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o*

*producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (según la dicción del artículo 25.1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, acorde con el artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa aplicable a este proceso por razones temporales y con los antecedentes jurisprudenciales.*

*En virtud de este esquema, la jurisprudencia declara que tienen la consideración de actos de trámite los actos resolutorios que se producen dentro de un procedimiento y que cierran cada una de sus fases, como ocurre con la aprobación inicial o provisional de determinados proyectos y planes (sentencias, entre otras muchas, de 28 de marzo de 1981 [RJ 1981, 1123] y 10 de marzo de 1992 [RJ 1992, 3260]). Excluye, sin embargo, de este supuesto aquellos actos que predeterminan de manera significativa el contenido de actos posteriores de aplicación o desarrollo (v.gr. sentencia de 13 de octubre de 1980 [RJ 1980, 3921])”.*

En cuanto al carácter de acto de trámite cualificado que posee la adopción de una medida provisional, como las previstas en los artículos 72 y 104 de la LRJPAC, podemos atender a una frondosa jurisprudencia que los delimita de manera clara y evidente, entre otras pueden señalarse a modo de ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 22 de noviembre de 2007 y de 7 de noviembre de 2008. Ésta última, sirva de muestra, dice lo siguiente:

*"El recurrente denuncia en el motivo tercero bajo el cauce del apartado d) del artículo 88.1, la infracción del artículo 25 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), pues en relación con el artículo 51.1c), discrepa de la consideración de la Sala de Instancia acerca del que el acto impugnado sea un simple "acto de trámite puro", dada la privación de libertad sufrida, alegando en definitiva que el acto que se pretende recurrir es un acto de trámite impugnabile.*

*En efecto, la jurisprudencia, superando planteamientos anteriores, ha estimado recursos en los que se planteaba análoga cuestión a la que ahora nos ocupa (así, en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fechas 6 de octubre de 2006 (rec. núm. 4465/2003 [ RJ 2006, 8693]), 12 de mayo de 2006 (rec. núm. 4345/2003 [ RJ 2006, 3835]), y 28 de octubre de 2005 (rec. núm. 3769/2003 [ RJ 2005, 7954]), y la sentencia de esta Sección de 20 de abril de 2007 (rec. núm. 9171/2003 [ RJ 2007, 4291]) y al igual que en los casos resueltos en aquellas sentencias, en este caso el acto administrativo recurrido inicia un procedimiento de expulsión y, en ese aspecto, es sin duda un acto de trámite, pero también posibilita que el Juez de Instrucción adopte la medida cautelar de internamiento.*

*En efecto, se decide en el acto recurrido "proponer, en atención a las circunstancias personales del interesado/a, al Juez de Instrucción, que disponga su ingreso en centro de internamiento, en tanto se sustancia el expediente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000 (RCL 2000, 72, 209), reformada por la Ley Orgánica 8/2000 (RCL 2000, 2963 y RCL 2001, 488)".*

*No cabe duda de que esta determinación (que no es condición suficiente para el posterior e hipotético internamiento, pero que es condición necesaria, pues sin ella no puede darse), afecta a la situación personal del interesado y no es, por lo tanto, un mero acto que inicia el procedimiento o lo impulsa, sino una decisión actual de la que depende aquélla".*

Se desprende por tanto de esa jurisprudencia, que los actos de trámite cualificados tienen entidad propia por cuanto deciden sobre aspectos fundamentales y que al ser susceptibles de generar una situación de posible indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos,

deben ser tratados como actos susceptibles de ser impugnados autónomamente.

Conforme a lo expuesto, el presente recurso contencioso-administrativo y solicitud de medidas cautelarísimas tiene por objeto exclusivamente la decisión municipal de suspender los efectos de un acuerdo plenario de fecha anterior al de 21 de noviembre de 2011, durante la instrucción del procedimiento administrativo que se inicia y la adopción de actuaciones materiales de recuperación de bienes y servicios municipales.

**III.-** Que la competencia para conocer del presente recurso la ostenta el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos conforme a lo dispuesto en los artículos 8.1 y 14.1.1º de la LJCA.

**IV.-** Que mi representada se encuentra legitimada como parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la LJCA (vid. apartado segundo del acto administrativo impugnado); y el Ayuntamiento de Valverde del Camino como parte recurrida al amparo del artículo 21.1.a) de la LJCA.

**V.-** Que el presente recurso se interpone en el plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo señalado en el artículo 46.1 de la LJCA. En este sentido, aunque el acto administrativo impugnado no ha sido todavía notificado formalmente a mi representada, ésta ha tenido conocimiento del mismo con antelación, al margen del procedimiento.

En este caso es aplicable analógicamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 58 de la LRJPAC sobre los efectos de las notificaciones defectuosas que surten efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento y alcance de la resolución o interponga un recurso contra la misma. En ambos casos se garantiza la finalidad misma del régimen jurídico de la notificación de los actos administrativos, que el interesado conozca su contenido cuando afecta a sus derechos e intereses y pueda ejercitar su derecho fundamental de defensa.

**VI.-** Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45.2 de la LJCA, se acompaña a este escrito:

1. Copia autorizada de la escritura de poder acreditativa de mi representación (**DOC. 1**).
2. Texto del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de fecha 21 de noviembre de 2011, que inicia el procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, por el que se adoptaron determinadas resoluciones en relación con la permanencia del Municipio en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, se efectúan aportaciones extraordinarias al capital social de GIAHSA y por el que se otorga una concesión demanial a GIAHSA de los bienes, infraestructuras, instalaciones y redes afectas al servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como todas aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua, y donde se adopta la medida cautelar de suspensión de la ejecución y los efectos del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino, de 15 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la LRJPAC. (**DOC. 2**).
3. Acuerdo del Presidente de la MAS por el que se decide proceder a la interposición del presente recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino por el que se inicia el procedimiento de declaración de lesividad del Acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, concretamente el apartado tercero del mismo (**DOC. 3**).

Por todo lo expuesto,

**SUPLICA AL JUZGADO** que tenga por presentado este escrito y documentos que se acompañan, los admita; por interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra el **apartado tercero del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de fecha 21 de**

**noviembre de 2011**, que inicia el procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, por el que se adoptaron determinadas resoluciones en relación con la permanencia del Municipio en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, se efectúan aportaciones extraordinarias al capital social de GIAHSA y se faculta a la Alcaldía a otorgar una concesión demanial a GIAHSA de los bienes, infraestructuras, instalaciones y redes afectas al servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como todas aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua; a mí por parte recurrente, en nombre de quien comparezco, entendiéndose conmigo las sucesivas diligencias y actuaciones, ordene requerir a la Administración correspondiente que remita el expediente administrativo, con el emplazamiento de los interesados y acuerde cuanto más en Derecho proceda.

Por ser de Justicia que pide en Huelva, a veintinueve de noviembre de dos mil once.

**PRIMER OTROSÍ DICE**, que al amparo del artículo 129, 135 y concordantes de la LJCA, y en aras de garantizar la plena eficacia y ejecución de la eventual sentencia estimatoria que recaiga en el presente recurso, solicita la adopción de **MEDIDA CAUTELARÍSIMA**, consistente en la suspensión del apartado tercero del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de 21 de noviembre de 2011 y el consecuente mantenimiento de la ejecutividad del Acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, todo ello con fundamento en los siguientes

### **MOTIVOS**

**Primero.- Objeto de la solicitud de medidas cautelarísimas: la improcedente y temeraria suspensión de la ejecutividad de los acuerdos adoptados por el Pleno de Valverde del Camino el 15 de noviembre de 2010 durante la**

**tramitación del procedimiento de declaración de lesividad.**

En fecha 15 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento Pleno de Valverde del Camino adoptó el acuerdo de permanencia en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva durante al menos el periodo de duración de la concesión demanial de las infraestructuras del municipio afectas a la prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua (**DOC. 4**). En el mismo se acuerda:

*"1º.- El municipio de Valverde del Camino permanecerá en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva durante al menos el período de duración de la concesión demanial de las infraestructuras del municipio afectas a la prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua. No obstante, en caso de pretender ejercitar el derecho de separación antes del referido plazo y sin perjuicio de las consecuencias que el rescate de la concesión otorgada a GIAHSA pueda tener y las demás inherentes a la separación, se compromete a satisfacer previamente a la Mancomunidad la aportación extraordinaria establecida por acuerdo del Pleno de dicha entidad de 29 de julio de 2010.*

*2º.- Si por insuficiencia de las tasas establecidas su recaudación no cubriera el coste de prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua, de modo que la entidad instrumental gestora no pudiera hacer frente a sus obligaciones financieras, el Ayuntamiento se compromete a abonar a la Mancomunidad en la proporción que le corresponda, la aportación extraordinaria establecida para tal supuesto por el Pleno de dicha entidad de 12 de noviembre de 2010.*

*3º.- Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a abonar a la Mancomunidad las aportaciones establecidas por la misma, según acuerdo plenario de 12 de noviembre de 2010 relativo a la ampliación del capital social de GIAHSA, cuando se den las*



*circunstancias previstas en dicho acuerdo y en la forma y plazos previstos en el mismo.*

*4º.- Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda para la ejecución de los anteriores acuerdos y, en especial, para la firma de cuantos documentos ello comporte.”*

Tras la adopción del referido acuerdo, en fecha 13 de enero de 2011 y en ejecución del mismo, el Alcalde de Valverde del Camino procedió a otorgar a la entidad mercantil “Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.” (GIAHSA), una concesión demanial de las infraestructuras de titularidad municipal afectas a la prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de aguas y las relacionadas con el ciclo integral del agua. Asimismo, suscribió en la misma fecha, un Convenio entre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, su sociedad instrumental *Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA)* y el Ayuntamiento de Valverde del Camino, para la estabilidad de la prestación de los servicios mancomunados relacionados con el ciclo integral del agua (**DOC. 5**).

El referido acuerdo de 15 de noviembre de 2010 fue impugnado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huelva por la concejal del Ayuntamiento de Valverde del Camino, Dña. María Dolores López Gabarro, actual Alcaldesa de la localidad, autos de procedimiento ordinario nº 314/2011.

En dicho proceso judicial no se instaron medidas cautelares tendentes a lograr la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado que ha desplegado todos sus efectos como a continuación se expondrá.

Tras la constitución de la nueva Corporación del Valverde del Camino, una vez celebrados los comicios en el mes de mayo de 2011, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino acuerda iniciar procedimiento de declaración de lesividad del Acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2010 (**DOC. 2**) por considerar que el mismo es anulable conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJPAC.

La escueta motivación de la decisión de declarar lesivo para el interés general del Municipio el acuerdo del Pleno de 15 de noviembre de 2010 y proceder a su impugnación ante el orden contencioso-administrativo es la siguiente:

*"3. En el presente supuesto, el acto objeto de este procedimiento de declaración de lesividad reúne en un primer análisis indiciario todos los requisitos para su anulación: compromete gravemente la estabilidad económica del municipio, sin contraprestaciones por parte de la MAS o de GIAHSA; supone una verdadera liberalidad de fondos públicos contraria a los intereses económicos de Valverde del Camino; implica un blindaje de carácter económico para poder separarse de la Mancomunidad en defensa de los legítimos intereses municipales, incompatible con la recta gestión de los intereses económicos municipales e inadmisibles en buen Derecho; no se comprende dónde están los beneficios económicos de esta operación para el municipio, operación que esconde, en el mejor de los casos, una ineptitud rayana en la negligencia culposa y en la responsabilidad contable de quienes votaron a favor de esta iniciativa trágica para las cuentas del Ayuntamiento y para los intereses del Municipio; y por fin, vulnera frontalmente la legalidad vigente, tanto desde la perspectiva tributaria (fijación irregular de la tasa por uso y ocupación privativa de los bienes de dominio público), contractual (ausencia de publicidad y concurrencia), patrimonial (irregular aplicación de la legislación de patrimonio de las Administraciones públicas), como desde la óptica de la gestión económica y presupuestaria.*

*De igual forma, la violación de la legalidad por el acto lesivo constituye un supuesto grave, manifiesto e insubsanable, que le hace merecedor del reproche jurídico de anulabilidad, siendo esta vía la procedente para restaurar el orden jurídico vulnerado".*

El Pleno de la Corporación no sólo acuerda de forma totalmente infundada y temeraria la declaración de lesividad de unos acuerdos esenciales para el

interés general de los vecinos de la localidad de Valverde del Camino, sino que además decide, sin ninguna justificación o motivación, adoptar las siguientes medidas provisionales: (i) suspender la eficacia del acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2010 y (ii) *"en consecuencia"* (sic) proceder a *"recuperar por los medios técnicos, jurídicos y personales propios del Ayuntamiento de Valverde del Camino que resulten necesarios, el servicio y los bienes, infraestructuras, instalaciones y redes afectas al servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como todas aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua, así como el servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos"*.

Esta decisión cautelar carente de toda motivación y absolutamente contraria al ordenamiento jurídico constituye el objeto del presente recurso e incidente cautelar, interesándose de ese Juzgado la suspensión del acuerdo tercero del Pleno de 21 de noviembre de 2011 y, en consecuencia, el mantenimiento de la eficacia de la resolución administrativa cuya declaración de lesividad se pretende durante la instrucción del procedimiento.

#### **Segundo.- Fundamentos de la medida cautelar de suspensión solicitada.**

Por atendibles razones expositivas, se realiza la fundamentación jurídica de la solicitud de medida cautelarísima conforme a la motivación de la sentencia del Tribunal Supremo, Sección 5ª, de 14 de junio de 2006, sobre los requisitos de adopción de la medida cautelar y la ponderación de los intereses en conflicto.

Dispone el artículo 130.1 de la LJCA que *"la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o de la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso"*.

Esta pérdida de la finalidad legítima del recurso no debe interpretarse de forma restrictiva, sino flexible, pues, de lo contrario, se violaría el derecho fundamental a la tutela cautelar (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2002).

Así, con la regulación contenida en los artículos 129 y siguientes de la LJCA, la adopción de medidas cautelares y, especialmente, la suspensión de la ejecución del acto recurrido podría acordarse cuando, previa ponderación circunstanciada de todos los intereses en conflicto, se considere que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.

En este sentido, la sentencia anteriormente citada del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 2006, recoge las notas características de la regulación de las medidas cautelares adoptada por la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señalando que:

*"La vigente regulación de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Capítulo II del Título VI) se integra, como se ha expresado, por un sistema general (Arts. 129 a 134) y dos supuestos especiales (arts. 135 y 136), caracterizándose el sistema general por las siguientes notas:*

*1ª. Constituye un sistema de amplio ámbito, por cuanto resulta de aplicación al procedimiento ordinario, al abreviado (art. 78 LRJCA), así como al de protección de los derechos fundamentales (arts. 114 y siguientes); y las medidas que puedan adoptarse tanto respecto de actos administrativos como de disposiciones generales, si bien respecto de éstas sólo es posible la clásica medida de suspensión y cuenta con algunas especialidades procesales (arts. 129.2 y 134.2 LJ).*

*2ª. Se fundamenta en un presupuesto claro y evidente: la existencia del periculum in mora. En el art. 130.1, inciso segundo, se señala que la "medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso".*

*3ª. Como contrapeso o parámetro de contención del anterior criterio, el nuevo sistema exige, al mismo tiempo, una detallada valoración o ponderación del interés general o de tercero. En concreto, en el art. 130.2 se señala que, no obstante la concurrencia del periculum in mora, "la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero".*

*4ª. Como aportación jurisprudencial al sistema que se expone, debe dejarse constancia de que la conjugación de los dos criterios legales de precedente cita (periculum in mora y ponderación de intereses) debe llevarse a cabo sin prejuzgar el fondo del litigio, ya que, por lo general, en la pieza separada de medidas cautelares se carece todavía de los elementos bastantes para llevar a cabo esa clase de enjuiciamiento, y que por lo demás se produciría el efecto indeseable de que, por amparar el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar, se vulneraría otro derecho, también fundamental e igualmente recogido en el artículo 24 de la Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba.*

*5ª. Como segunda aportación jurisprudencial -y no obstante la ausencia de soporte normativo expreso en los preceptos de referencia- sigue contando con singular relevancia la doctrina de la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), la cual permite (1) en un marco de provisionalidad, (2) dentro del limitado ámbito de la pieza separada de medidas cautelares, y (3) sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, proceder a valorar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión, siquiera a los meros fines de la tutela cautelar".*

Partiendo de lo anterior, se deben destacar los tres aspectos esenciales de este sistema de medidas cautelares establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio: (1) En primer término, la apuesta del legislador por el criterio o presupuesto legal del denominado *periculum in mora* como fundamento de

las medidas cautelares; (2) en segundo lugar, el sistema exige, al mismo tiempo, una detallada valoración o ponderación de los intereses en conflicto; y, (3) en tercer lugar, la doctrina jurisprudencial permite una valoración provisional y limitada de los fundamentos de la pretensión, doctrina de la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*).

En el presente caso, **la suspensión del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de 15 de noviembre de 2010 durante la tramitación del procedimiento de declaración de lesividad, haría perder la finalidad legítima al presente recurso y causaría perjuicios irreparables a los intereses generales de 70 municipios de la provincia de Huelva (el de Valverde del Camino incluso) que representa la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva**, por lo que procede su suspensión de conformidad con los motivos que a continuación se exponen.

**Tercero.- Circunstancias de especial urgencia que concurren para adoptar la medida cautelar de forma inmediata e inaudita parte.**

En relación con "*las circunstancias de especial urgencia*" que concurren en el presente caso para adoptar la medida cautelar de forma inmediata e inaudita parte, al amparo del artículo 135 de la LJCA, debe indicarse que **la ejecución inmediata del acuerdo impugnado supondría un grave perjuicio para el interés público por cuanto se pondría en serio peligro el servicio de gestión del ciclo integral del agua que viene siendo prestado por la Mancomunidad de Servicios de Huelva (en adelante, también MAS) a través de su medio propio GIAHSA**, pues la aplicación inmediata de una medida como la adoptada por el Ayuntamiento de Valverde del Camino, que ahora se recurre, **causaría unos perjuicios irreparables en los entes que prestan dicho servicio, con el correlativo peligro respecto de la adecuada prestación del mismo para las poblaciones a las que sirve la Mancomunidad.**

Hay que resaltar que, como el propio acto impugnado indica, lo que está en juego para el Ayuntamiento de Valverde del Camino son intereses económicos, sin que tenga en cuenta que la adopción de una medida automática de suspensión y retirada del servicio como la que acuerda **supone una verdadera separación de la MAS por la vía de los hechos, causando un perjuicio a los entes públicos que en la actualidad están prestando el servicio público que repercute en el resto de los municipios que forman parte de la Mancomunidad.**

En ningún caso **es irreparable el perjuicio que alega el Ayuntamiento, pues se trata únicamente de un interés económico que, de un lado, como seguidamente se analizará no es tal, y de otro, no puede prevalecer en ningún caso frente a los intereses supramunicipales como expresamente se reconoce en el artículo 76 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía** al establecer el procedimiento de separación de los municipios mancomunados.

En este sentido y con absoluto respeto a la Ley, los municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios de Huelva, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Valverde del Camino, se dotaron no sólo de las normas de procedimiento para los supuestos de separación previstos en sus Estatutos, sino que las mismas se reforzaron en el Acuerdo del Pleno de la MAS de fecha 12 de noviembre de 2010 de ampliación de capital de GIAHSA, ratificado por todos los Ayuntamientos que integran la misma, y por ende por el Ayuntamiento de Valverde, a fin de evitar en todo lo posible los daños que una decisión unilateral de un municipio integrante de la Mancomunidad pudiera causar a los demás y a la adecuada prestación del servicio público.

Así, a través del Acuerdo de ampliación del capital de GIAHSA, la MAS, y por consiguiente los municipios que la integran no sólo por su pertenencia a la misma sino por la ratificación expresa posterior de aquel acuerdo, introdujo una serie de requisitos de necesario cumplimiento para poder hacer efectiva la separación de la MAS por parte de un municipio, con la finalidad precisamente de evitar que se provocara un perjuicio irreparable,

en primer lugar, a la población de ese municipio que pretende la separación y, en segundo lugar, al resto de municipios que forman la Mancomunidad y por ende a sus respectivas poblaciones. Concretamente, se expresa que:

*"El acuerdo por el que se decida la recuperación de la gestión del servicio público relativo al ciclo integral del agua (en adelante, también CIA) supondrá la separación voluntaria del municipio respecto de la MAS, previos los trámites correspondientes.*

*En cuanto al preaviso, si el ejercicio económico de GIAHSA coincide con el año natural, el Municipio que pretenda recuperar el servicio deberá comunicarlo como muy tarde el 30 de junio, para hacerse efectivo el 1 de enero del ejercicio siguiente. En adelante, dicha comunicación será referida como "la comunicación de recuperación del servicio".*

*Este preaviso de seis meses es imprescindible para contar con plazo razonable para la preparación y organización de la unidad de gestión a entregar al Municipio que recupera el servicio y para la reorganización de gestión del servicio por GIAHSA en el nuevo escenario, de modo que quede salvaguardado el interés general que se persigue en toda prestación de servicio público.*

*La concreción de una determinada fecha de efectos (1 de enero del ejercicio siguiente) es imprescindible para concretar todos los eventuales procesos y efectuarlos de manera coordinada, evitando así el solapamiento de varios procesos de separación que eventualmente comenzasen en distintas fechas, de manera que el inicio de uno de estos procesos convirtiera en baldía la reorganización del servicio ya comenzada en un proceso anterior."*

En dicho Acuerdo se establece de forma meridiana la necesidad de un plazo mínimo de antelación de 6 meses para la reorganización y prestación por la nueva entidad del servicio, por tanto, **la suspensión del mismo por el cauce del artículo 104 LRJCAP supondría un grave perjuicio a la población de Valverde del Camino, suprimiendo la prestación de un servicio público cuyo tiempo estimado de restablecimiento en situación óptima es de seis meses, algo que bajo ninguna circunstancia se puede consentir pues la salud de las personas es un bien jurídico especialmente protegido, por encima de cualquier**



**bien económico digno de protección, única pretensión planteada por el Ayuntamiento de Valverde del Camino.**

Indicar además que los Tribunales de lo contencioso-administrativo en relación con el artículo 104 LRJPAC han señalado que el mismo no es aplicable en los supuestos en los que existan intereses jurídicos de especial y mayor protección que el bien que se pretende tutelar con la medida cautelar, concretando que, en ningún caso, hay que atender a este último bien cuando lo que se protege es un interés particular frente el resto de bienes jurídicos de especial protección. Sirva de ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), Sentencia número 760/2003, de 17 de diciembre:

*"Las razones esgrimidas por la sentencia que se recurre, en relación con el artículo 104 de la Ley 30/92, pueden concretarse en la peculiaridad del caso, pues es cierto, como la propia sentencia reconoce, que el interés del alumnado exige que el docente tenga la titulación adecuada para desempeñar el puesto de que se trata; pero también reconoce la propia resolución impugnada, este caso está rodeado de "características y circunstancias" que en él se producen, tales como el nombramiento temporal, la limitación del nº de alumnos (..). Y entendió la sentencia de instancia que, precisamente, ese interés del alumnado estriba, no sólo en la presencia de una adecuada titulación; sino también en la inconveniencia de dejar sin efecto de forma inmediata el nombramiento de la entonces actora y ahora apelada. Concluyendo el juez de instancia que "según se desprende de las actuaciones del expediente, lo más conveniente y ordenado para los alumnos era la continuación de la recurrente en su puesto".*

Por tanto, a la vista de la sentencia arriba mencionada, **existen en este caso las denominadas por el Tribunal Supremo "características y circunstancias" que justifican la estimación de la medida cautelar solicitada puesto que la suspensión inmediata de la prestación del**

**servicio del ciclo integral del agua por parte de la MAS a través de GIAHSA por supuestas irregularidades e incumplimientos, que en ningún caso han quedado acreditados (hay que destacar que el servicio lleva prestándose alrededor de 20 años sin ningún tipo de incidente), provocaría más problemas, de mucha mayor enjundia y prácticamente irresolubles, que beneficios.**

Por todo ello es necesario que por ese Juzgado se acuerde de forma inmediata el mantenimiento de la ejecutoriedad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valverde de 15 de noviembre de 2010, impidiendo la separación de este Municipio de la Mancomunidad de Servicios por la vía de los hechos, dejando sin efecto la medida provisional de suspensión acordada al amparo del artículo 104 de la LRJPAC.

Conforme a lo expuesto, concurren las especiales razones de urgencia que legitiman la adopción de la medida cautelar inaudita parte dado que la suspensión inmediata de la ejecutividad del acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2010 decretada invocando el artículo 104 de la LRJPAC, que supondría la separación irregular del Ayuntamiento de Valverde del Camino de la Mancomunidad de Servicios, es susceptible de causar los perjuicios de imposible o difícil reparación que se han señalado y se exponen con mayor detalle en el siguiente motivo.

Por todo ello se interesa que, considerando la naturaleza de los graves perjuicios que para el interés público se derivarían de la suspensión del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, se acuerde, de conformidad con el artículo 135 de la LJCA, la medida cautelar de forma inmediata, convocando a las partes a la vista prevista en el citado precepto o concediendo a la parte demandada un plazo de tres días para que alegue lo que a su derecho convenga.

**Cuarto.- Sobre el *periculum in mora*: la inmediata ejecutividad de la medida de suspensión de los acuerdos del Pleno de Valverde del Camino de 15 de noviembre de 2010 privaría al recurso contencioso-administrativo interpuesto de cualquier “efecto útil”.**

Si se mantiene la suspensión de la eficacia del Acuerdo del Pleno de Valverde del Camino de 15 de noviembre de 2010 acordada como medida provisional (artículo 104 de la LRJPAC) por el acto administrativo impugnado, una eventual y probable desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la ulterior declaración de lesividad no satisfaría el derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante que quedaría, por el transcurso del tiempo, privado de cualquier efectividad.

En caso de no estimarse la medida cautelar solicitada, la recuperación por parte del Ayuntamiento de Valverde del Camino del servicio y los bienes, infraestructuras, instalaciones y redes del ciclo integral del agua, actualmente cedidos a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, provocaría a ésta los siguientes perjuicios irreparables o de muy difícil reparación:

- a) La decisión impugnada supone la **separación de facto de la Mancomunidad provincial a la que pertenece el Ayuntamiento de Valverde del Camino, perjudicará, en primer lugar y de forma muy significativa, al propio municipio y a sus residentes, al quedar apartado del circuito establecido por la Administración autonómica para la prestación de los auxilios técnicos y económicos**, y por tanto, devendrá la pérdida de las inversiones autonómicas en lo referido al ciclo del. Así lo indica la propia Ley 9/2010, de 30 de julio, en su artículo 32.3 párrafo 4º recoge lo siguiente:

*"La falta de integración de los entes locales en los sistemas supramunicipales de gestión del agua de uso urbano, de acuerdo con lo establecido en este apartado, conllevará la imposibilidad para dichos entes de acceder a las medidas de fomento y auxilio económico para infraestructuras del agua, su mantenimiento y explotación, que se establezcan por la Administración Autonómica".*

- b) Las consecuencias de tal decisión **pondrían en peligro la salud pública por no poder garantizarse la prestación del ciclo integral del agua por parte de GIAHSA en razón de los brevísimos plazos de los que dispondría**, pues materialmente no daría tiempo a poder reorganizar el servicio de gestión del ciclo integral del agua con las debidas garantías para los ciudadanos.

Destacar, que en el propio Acuerdo de ampliación de capital de GIAHSA, el tiempo estimado de preaviso obligatorio para poder llevar a cabo la separación, es de un mínimo de 6 meses, por ser ese plazo el estimado para poder reorganizar y prestar por medios propios el servicio del ciclo integral del agua. Por tanto, el propio Ayuntamiento con la ratificación de dicho acuerdo asume que el plazo mínimo son 6 meses, quedando en entredicho la medida que pretende tomar de suspensión automática de la prestación de un servicio público de vital importancia, a sabiendas de que no se podrá restablecer el servicio de una manera rápida y segura.

- c) Además, **los perjuicios serían irreparables puesto que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de depuración de aguas residuales que impone el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, no podrían ser subsanadas después de la sentencia** que ponga definitivamente fin al contencioso en todas sus instancias, tal como ocurrirá con los daños que durante la pendencia del proceso, se causen a la salud de las personas, a los sistemas marinos e incluso a la economía general de la comarca.

- d) La **decisión del Ayuntamiento dejaría además a la Mancomunidad de Servicios, y por extensión a GIAHSA, expuesta a las responsabilidades derivadas del incumplimiento aludido.**

- e) Asimismo, se produciría otro daño de gran importancia, que se le causaría tanto a la Mancomunidad como a todos los municipios que

la integran, que sería la **quiebra de la confianza que la salida apresurada del municipio de Valverde del Camino, sin respetar los compromisos existentes, generará en otras Administraciones, en las instituciones financieras y en los ciudadanos en general**, con la consiguiente reducción de los flujos inversores y financieros hacia la misma.

- f) Las reclamaciones que el Ayuntamiento de Valverde está realizando a la MAS, referentes todas ellas al canon y a la capitalización del mismo, así como la suspensión que decreta, **están dinamitando todo el procedimiento llevado a cabo por esta parte con las entidades financieras para la firma de un crédito al objeto de conseguir los recursos que permitan sufragar la "capitalización del canon concesional" de todos los municipios**. Dicha actitud del Ayuntamiento de Valverde está provocando que, un acuerdo que tiene como fecha de cierre antes de final de año, se encuentre en una situación de verdadero peligro cuando los únicos beneficiarios son los Ayuntamientos integrados en la MAS, entre los que se encuentra evidentemente el Ayuntamiento de Valverde del Camino. La obtención de la financiación supondría la eliminación del presunto "*daño irreparable*" que la demandada sostiene como único argumento de la medida cautelar adoptada al amparo del artículo 104 LRJPAC.

Se aporta como **DOC. 6**, documentación acreditativa de la gestiones que se están realizando en la actualidad por la MAS y GIAHSA para la consecución del crédito.

Por otra parte, los hipotéticos perjuicios irreparables alegados por el acto impugnado serían, en su caso, únicamente de carácter económico. No obstante, dichos perjuicios sencillamente no existen como a continuación se expone.

Carecen de toda consistencia la reclamación de las cantidades pretendidamente adeudadas por la MAS como canon concesional por las

infraestructuras municipales que hace el Ayuntamiento, por cuanto, de un lado, no pueden reclamarse cantidades correspondientes a ejercicios anteriores a aquél en que tuvo lugar la concesión.

En este sentido, no hay que olvidar que la firma del Título de Concesión Demanial y su Addenda, es de fecha 13 de enero de 2011, por cuanto nada se debe en razón de importe del canon correspondiente al ejercicio 2010, puesto que sus efectos según la Addenda de fecha 13 de enero de 2011, en cuya cláusula tercera se indica:

*“Tercera.- El Ayuntamiento de Valverde del Camino se compromete a ceder mediante concesión demanial a GIAHSA las infraestructuras de titularidad municipal afectas a los servicios relacionados con el ciclo del agua, por un período de 30 años. La concesión entrará en vigor en la fecha que determine la Mancomunidad, que no podrá ser posterior a 31 de diciembre de 2010. GIAHSA se compromete a abonar al Ayuntamiento el correspondiente canon, de acuerdo con lo determinado por los acuerdos adoptados por el Pleno de la Mancomunidad”.*

De otro lado, las cantidades relativas al canon correspondiente por la anualidad 2011, no se encuentran vencidas y exigibles, por cuanto la fecha de vencimiento de las mismas es el día 31 de diciembre de 2011, pues no se ha acordado el fraccionamiento ni trimestral ni semestral:

*“Las cantidades a pagar anualmente del canon se realizarán en 30 pagos iguales de 353.451 euros/año, que podrán fraccionarse semestralmente o trimestralmente a petición municipal. En esta cantidad está incorporada la actualización prevista de IPC en el período de concesión”.*

De igual manera, hay que destacar que la capitalización de las primeras 15 anualidades del canon, se establece como una posibilidad del concesionario pero no como una obligación, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo el acuerdo de capitalización con las condiciones de la misma para que

fuera exigible, como aparece recogido en la Addenda con las siguientes palabras:

*"Las quince primeras anualidades podrán ser capitalizadas total o parcialmente el primer año aplicando una tasa de descuento que se estima del 9 por ciento, hasta un máximo de 3.105.479 euros".*

Sin perjuicio de lo anterior, GIAHSA siempre ha mostrado la voluntad de llevar a cabo dicha capitalización a fin de favorecer la tesorería de los municipios integrados en la MAS, para lo cual se están realizando negociaciones para la obtención de crédito; una muestra más que evidente de la buena fe de esta parte y de la pretensión real y efectiva que tiene de pagar dicha capitalización del canon, siempre y cuando las actuaciones del Ayuntamiento y su actitud lo permitan, pues con actuaciones como la recurrida no hace sino imposibilitar la negociación de los créditos que a la postre la beneficiarían.

A mayor abundamiento indicar que durante los veinte años anteriores en los que se ha venido prestando el servicio, la cesión demanial era gratuita. Sólo en el momento en el que el Ayuntamiento de Valverde del Camino tiene una expectativa de cobro de un canon por dicha concesión, reclama unas cantidades alegando que ya están vencidas, mostrando una actitud del todo incoherente en relación a los antecedentes descritos y una absoluta deslealtad institucional.

No se trata de mera especulación. La Mancomunidad provincial nació en el año 2010, sucesora a su vez de otra que comenzó en 1992 que acometió fuertes inversiones en materia del ciclo del agua, absolutamente necesarias para la Costa de Huelva, y sin las cuales hubiera sido imposible el desarrollo turístico y económico que existe en la actualidad. El sistema común ha funcionado más que satisfactoriamente porque la Mancomunidad se mantuvo y ofreció una imagen cohesionada y la Junta de Andalucía invirtió ingentes cantidades de dinero, además que las instituciones financieras concedieron (y están actualmente en vías de conceder) cuantiosos préstamos porque tenían y tienen la garantía de la facturación del suministro de agua en los municipios beneficiados, hoy casi 80.

Finalmente, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 103.3 de la LRJPAC, **el Ayuntamiento de Valverde del Camino dispone de un plazo de seis meses para resolver el procedimiento de declaración de lesividad desde su incoación**, por lo que de mantenerse la medida provisional acordada durante ese espacio de tiempo se generarían unos perjuicios irreparables para los intereses generales de las entidades de la Mancomunidad de Servicios y para los habitantes de los municipios mancomunados, incluidos los de Valverde del Camino.

**Quinto.- Apariencia de buen derecho de las pretensiones de la entidad recurrente: “*Fumus bonis iuris*”.**

En lo que respecta a la apariencia de buen derecho que otorga solidez a los fundamentos jurídicos que sostienen esta pretensión y, sin intención de prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, por no ser éste el momento procesal pertinente, ni disponer de los elementos de juicio suficientes, se deben, no obstante, destacar una serie de hechos que permiten valorar con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza, la pertinencia de la adopción de la medida cautelar aquí solicitada, que no es sino el pleno ejercicio de una tutela cautelar efectiva, tal y como ha señalado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El propio Tribunal Supremo ha afirmado, en sentencia de 11 de abril de 1996, que:

*"[...] baste señalar que sin perjuicio de la doctrina constante de este Sala y Sección, por todas Sentencia de 22 febrero 1995 (RJ 1995\1273), en el sentido de que cuando la sanción impuesta implique cese de la actividad sí puede suponer la producción de unos daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, que son los presupuestos en los que descansa el ejercicio de la facultad de suspensión por los Tribunales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción, por lo que la Sala de instancia, no vulnera el contenido del precepto citado por su indebida aplicación ni la doctrina jurisprudencial*



*sobre su aplicación; sin que por otra parte pueda olvidarse que el principio de tutela judicial efectiva, proclamado por el artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), posibilita adoptar medidas cautelares y que la efectividad que se predica de la tutela judicial reclama la posibilidad de acordar tales medidas que aseguren la eficacia real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso y que la fiscalización plena de la actuación administrativa comporta que el control judicial se extienda al carácter inmediatamente ejecutivo de los actos de la administración, todo lo cual resulta predicable cuando «prima facie» una apariencia de buen derecho debe justificar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, pues no puede olvidarse que la suspensión, que en definitiva supone una tutela cautelar, viene impuesta por el artículo 24 de la Constitución [...]”.*

**Los argumentos principales que justifican la apariencia de buen derecho de la pretensión de esta parte se basan en la improcedente aplicación al caso enjuiciado de los artículos 103 y 104 LRJCAP.**

Debe destacarse que el Ayuntamiento de Valverde del Camino, en el Acuerdo del Pleno por el que se inicia el procedimiento de declaración de lesividad de su acuerdo anterior de 15 de noviembre de 2010, señala como **aparente motivación del mismo** que:

*"3. En el presente supuesto, el acto objeto de este procedimiento de declaración de lesividad reúne en un primer análisis indiciario todos los requisitos para su anulación: compromete gravemente la estabilidad económica del municipio, sin contraprestaciones por parte de la MAS o de GIAHSA; supone una verdadera liberalidad de fondos públicos contraria a los intereses económicos de Valverde del Camino; implica un blindaje de carácter económico para poder separarse de la Mancomunidad en defensa de los legítimos intereses municipales, incompatible con la recta gestión de los intereses económicos municipales e inadmisibile en buen Derecho; no se*

*comprende dónde están los beneficios económicos de esta operación para el municipio, operación que esconde, en el mejor de los casos, una ineptitud rayana en la negligencia culposa y en la responsabilidad contable de quienes votaron a favor de esta iniciativa trágica para las cuentas del Ayuntamiento y para los intereses del Municipio; y por fin, vulnera frontalmente la legalidad vigente, tanto desde la perspectiva tributaria (fijación irregular de la tasa por uso y ocupación privativa de los bienes de dominio público), contractual (ausencia de publicidad y concurrencia), patrimonial (irregular aplicación de la legislación de patrimonio de las Administraciones públicas), como desde la óptica de la gestión económica y presupuestaria.*

*De igual forma, la violación de la legalidad por el acto lesivo constituye un supuesto grave, manifiesto e insubsanable, que le hace merecedor del reproche jurídico de anulabilidad, siendo esta vía la procedente para restaurar el orden jurídico vulnerado”.*

En primer lugar, debe señalarse que **el acuerdo de incoación aunque intente aparentarlo, carece de la más mínima motivación**, no justificando, siquiera someramente, ninguno de los infundados reproches que realiza a la actuación municipal que revisa.

Sin perjuicio de que la carga de la prueba corresponde a la Administración actuante, que debió motivar suficientemente el acuerdo adoptado, especialmente si pretende adoptar con el mismo una medida provisional de extrema gravedad y trascendencia jurídica, económica y social, esta parte niega de forma expresa y categórica: (a) que el Acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2010 comprometa gravemente la estabilidad económica del municipio; (b) que el Ayuntamiento de Valverde no reciba ninguna contraprestación por parte de MAS y GIAHSA; (c) que los requisitos para separarse de la Mancomunidad no se adecuen a Derecho, y (d) que el mismo vulnere la legalidad tributaria, contractual y patrimonial. Así:

- a) Resulta completamente incierto que el acuerdo del pleno municipal de 15 de noviembre de 2010 comprometa la estabilidad económica

de la Corporación local y menos aún “*gravemente*” como se añade. No es cierto en absoluto, ni el Ayuntamiento podrá aportar ningún principio de prueba de tan falso aserto. Valverde del Camino era miembro de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva (MACH) hasta su disolución en fecha 31 de diciembre de 2009, sucediendo a ésta la Mancomunidad provincial de Servicios con efectos desde el 1 de enero de 2010, a la que también pertenece el municipio de Valverde del Camino; pues bien, desde antiguo, es decir desde su incorporación a la Mancomunidad Costa de Huelva fundada en 1989, el Ayuntamiento de Valverde del Camino tenía cedidos a ésta, quien a su vez los tenía aportados a la sociedad pública instrumental GIAHSA a título de capital, los derechos de explotación del ciclo integral del agua (CIA) y de la gestión de residuos sólidos urbanos en este municipio (RSU) y las infraestructuras de titularidad municipal afectas a la prestación del CIA.

La Mancomunidad Costa de Huelva primero y posteriormente, tras su disolución, la Mancomunidad de Servicios de Huelva, a través de GIAHSA, **han venido de forma ininterrumpida desde 1989 hasta la fecha gestionando de forma directa el servicio público relacionado con el ciclo integral del agua de los municipios en ella integrados, entre los cuales y desde sus inicios se encuentra Valverde del Camino.** Desde entonces hasta el presente momento, jamás el municipio valverdeño ha visto en peligro su estabilidad económica por causa de su integración en la Mancomunidad por la gestión del ciclo integral del agua y de los residuos sólidos urbanos por GIAHSA, ni por la cesión de las infraestructuras exclusivamente de titularidad local afectas al CIA que gestiona GIAHSA. Nunca se ha producido la menor queja ni reclamación del municipio de Valverde del Camino desde 1990 hasta este improcedente acuerdo, fruto de una torpe y burda maniobra para poder negociar con operadores privados la gestión del agua y de ese modo obtener un beneficio económico inmediato que

pretende sufragar otros costes distintos a los del servicio, lo que supone, además, una evidente desviación de poder.

- b) La posición del Ayuntamiento de Valverde del Camino frente a la MAS actualmente es la de **deudor por importe de 1.160.681,17 euros**, como acreditamos con los siguientes documentos: Informe Económico de GIAHSA de fecha 25 de noviembre 2011 (**DOC. 7**); Certificación del Jefe de Servicios de Contabilidad de 25 de diciembre de 2001 (**DOC. 8**), Liquidación al 31 de diciembre de 2010 del pago desembolsado de 139.803,88 euros a cuenta del canon anual de concesión demanial al Ayto. de Valverde del Camino mediante pignoración de certificación expedida por la Intervención municipal a favor de Compañía General de Obras Gey Márquez, S.L. (**DOC. 9**) y así como la póliza de contrato mercantil de crédito suscrito con Unicaja (**DOC. 10**).
- c) Conforme a los Estatutos de la Mancomunidad definitivamente aprobados tanto por la Asamblea de Concejales como por los respectivos Plenos de la totalidad de los municipios mancomunados de cuya fundación precisamente fue parte integrante el de Valverde del Camino, y aprobados por Resolución de 4 de agosto de 2009 de la Dirección General de Administración Local, publicados en BOJA número 179, de 11 de septiembre de 2009, se establece en su artículo 31 los requisitos para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualesquiera de los municipios que la integran, a saber:
- Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por la mayoría absoluta en el Pleno de la misma;
  - Que se encuentre al corriente en el pago de sus aportaciones;

- Que abone todos los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo;

- Que haya saldado las deudas que hubiera podido contraer con las sociedades de gestión propias de la Mancomunidad.

Se acompaña fotocopia de los Estatutos de la Mancomunidad publicados en BOJA nº 179, de 11 de septiembre de 2009 **DOC. 11** de este escrito.

d) En ningún caso existió vulneración de los principios de concurrencia y publicidad en el otorgamiento a GIAHSA de una concesión demanial de las infraestructuras de titularidad municipal afectas a la prestación del servicio, ya que, como bien se recoge en el artículo 137.4 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en conexión con el artículo 93 de la misma ley, se permite la concesión sin necesidad de publicidad de la misma:

**"Artículo 93. Concesiones demaniales.**

*1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta Ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.*

**Artículo 137. Formas de enajenación.**

*[...]*

*4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos:*

*a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la*

*participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.”*

En segundo lugar, conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial acerca de la declaración de lesividad (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 23 abril de 2002, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 17 de septiembre de 1999 y 8 de noviembre de 2002, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 22 de diciembre de 2000) es necesario que el acto o acuerdo que se pretende declarar lesivo, haya incurrido en una doble vulneración del ordenamiento jurídico; por un lado, que atente gravemente al interés público; y por otro, que haya sido adoptado contraviniendo el ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia es muy restrictiva a la hora de estimar un recurso de lesividad aplicando el principio de seguridad jurídica, toda vez que supone una actuación administrativa que excepciona el principio general de que nadie puede ir contra sus propios actos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 17 de septiembre de 1999 señala:

*"El proceso de lesividad, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 17 de febrero de 1986 [RJ 1986/1592] y de 20 de mayo de 1988 [RJ 1988/3910]) constituye una excepción al principio general del Derecho de que nadie puede ir lícitamente en contra de sus propios actos, y como tal excepción debe interpretarse restrictivamente y cumplir los requisitos legales necesarios para su validez que, al margen de los de carácter procesal, fundamentalmente el plazo de cuatro años para la declaración de lesividad y el de dos meses desde ésta misma para la interposición del recurso, vienen constituidos por una doble exigencia: a) de un lado, que el acuerdo declarado lesivo implique una violación de leyes o disposiciones administrativas, es decir, una infracción del ordenamiento jurídico en la terminología vigente; b) en segundo lugar, un quebranto a los intereses públicos de carácter económico o de otra naturaleza”.*

Ninguno de los dos requisitos para la declaración de lesividad concurren en el presente caso por cuanto los intereses generales del Municipio de Valverde del Camino no se han visto gravemente perjudicados, todo lo contrario, la gestión mancomunada del ciclo integral del agua ha reportado al Municipio cuantiosos beneficios y, aún más, es el Ayuntamiento quien a la fecha presente no sólo adeuda a GIAHSA una considerable suma de dinero (1.160.681,17 €), sino que, además ha recibido adelantada la suma de 139.803,88 euros a cuenta del canon anual de concesión demanial al hacerse cargo GIAHSA de la deuda del Ayuntamiento con la Compañía General de Obras Gey Márquez, S.L., como certificó su propio Interventor municipal y antes hemos acreditado, además de que se tomó razón de la Póliza suscrita por el Ayuntamiento con UNICAJA por importe de 500.000 euros por la que GIAHSA se hará cargo a su vencimiento de la devolución del importe suscrito.

La adopción del acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2010 se ajusta escrupulosamente al ordenamiento jurídico por cuanto fue adoptada por el órgano competente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, con la suficiente motivación y de conformidad con la vigente legislación de régimen local.

La creación de la Mancomunidad provincial de Servicios con simultánea extinción de la Mancomunidad Costa de Huelva, no es un acontecimiento improvisado, sino consecuencia de un procedimiento que se ha forjado con conocimiento de todos los municipios participantes (Valverde incluido) desde hace más de tres años, en el siguiente sentido:

- a) Como conclusión de los trabajos llevados a cabo por la Comisión de Trabajo para la integración de los servicios que prestan la Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva el Pleno de ésta de 22 de mayo de 2008, acordó promover el proceso de fusión de la Mancomunidad Costa de Huelva con la Mancomunidad del Condado para la prestación conjunta de los servicios relativos a la gestión del ciclo integral del agua y otros fines que pueda asumir la Mancomunidad resultante. Con esa iniciativa se pretendía constituir una nueva

mancomunidad para la prestación de los servicios relativos a la gestión del ciclo integral del agua, como resultado de la fusión de la Mancomunidad de Costa de Huelva y de la Mancomunidad del Condado, y en la que pudiesen mancomunarse los municipios que estaban integrados en las Mancomunidades de aguas de la provincia de Huelva. A tales efectos se elaboró el Proyecto de Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva. Pues bien, en ese Pleno de 22 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Valverde del Camino votó a favor del proceso de fusión y de la creación de la nueva Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva.

- b) En desarrollo de ese acuerdo, y al amparo de lo dispuesto en la legislación vigente, se tramitó, el procedimiento establecido en la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, para la constitución de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva.
- c) Como ratificación de lo ya acordado, de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 7/2003, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, en cumplimiento de lo especificado en el informe de legalidad emitido con fecha 17 de marzo de 2009 por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, y con el fin de evitar conflictos de competencia entre las Mancomunidad Costa de Huelva y la del Condado por una parte, y la nueva Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva por otra, que pasaría a prestar los servicios que actualmente vienen prestando las dos primeras, se acreditó en el expediente de constitución del nuevo ente supramunicipal la voluntad de las Mancomunidades fundadoras de extinguirse una vez se constituyera la nueva, así como la de transmitirle la titularidad de los bienes y derechos afectos a los servicios que en ella se integraran. En concreto, el Pleno de la MACH en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2009 adoptaba el siguiente acuerdo:

– **«PRIMERO.- Manifestar la voluntad de la Mancomunidad de**



***Aguas Costa de Huelva de proceder a su extinción, una vez que se haya constituido la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y se hayan integrado en la misma los servicios que por la primera se vienen prestando en la actualidad.***

- ***SEGUNDO.- Que se lleve a cabo, una vez constituida la nueva Mancomunidad, el cambio de titularidad a favor de la misma de todos los bienes y derechos titularidad de esta Mancomunidad mediante las operaciones que sean necesarias.***
- ***TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente tan amplia y expresamente como en derecho sea necesario para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo».***

- d) En el mencionado BOJA nº 179, de 11 de septiembre de 2009, mediante Resolución de 4 de agosto de 2009 de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, se publican los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva.
- e) Tras la publicación de sus Estatutos y de conformidad con el artículo 31 de la Ley 7/2003, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, en sesión plenaria celebrada el día 5 de octubre de 2009 se constituyó la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva.
- f) Por parte de los Plenos de los Ayuntamientos de Ayamonte (20 de octubre de 2009), Aljaraque (19 de octubre de 2009), Beas (19 de octubre de 2009), Cartaya (23 de octubre de 2009), Gibraleón (20 de octubre de 2009), Isla Cristina (19 de octubre de 2009), Punta Umbría (15 de octubre de 2009), San Juan del Puerto (20 de octubre de 2009), San Silvestre de Guzmán (16 de octubre de 2009), Trigueros (22 de octubre de 2009), ***Valverde del Camino (16 de octubre de 2009)*** y Villablanca (19 de octubre de 2009), se acordó con el voto favorable la mayoría absoluta de sus miembros, su propósito de disolver la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva en los siguientes términos:

- La disolución y liquidación será con efectos de 31 de diciembre de 2009 (24:00 horas).
  - La disolución y liquidación no comportará la disolución y liquidación de GIAHSA, cuya personalidad jurídica permanecerá inalterada.
  - La liquidación de la Mancomunidad Costa de Huelva comportará la adjudicación del patrimonio de dicho ente supramunicipal al conjunto de Municipios integrados en él, que lo adquirirán en comunidad de bienes, en la proporción que les corresponda en la liquidación.
  - El porcentaje que a cada Municipio le corresponda en el patrimonio de la Mancomunidad se calculará sobre la base de lo aportado por cada Municipio.
- g) Con posterioridad, en sesiones de 29 de octubre y 10 de noviembre el Pleno de la MAS aprobó los instrumentos normativos necesarios para poder prestar los servicios que constituían sus fines a partir del día 1 de enero de 2010, en consonancia a lo acordado por cada uno de los municipios que se integraban en la misma.
- h) Con fecha 10 de diciembre de 2009, el Pleno de la MACH acordó, de conformidad con los artículos 29 y 30 de sus Estatutos, su disolución conforme a lo acordado por los Ayuntamientos mancomunados.
- i) Todos los municipios de la MACH, a excepción de Lepe y Moguer, manifestaron su voluntad de que los servicios del Ciclo Integral del Agua y de recogida de Residuos Sólidos Urbanos se siguieran prestando desde la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, a través de GIAHSA.
- j) Asimismo, teniendo en cuenta que GIAHSA no podría titular ni los recursos humanos y materiales necesarios, se acordó que, como paso previo a la liquidación, se detrajera de GIAHSA, vía reducción de capital a favor de su accionista -la MACH- las unidades de explotación de los servicios de Lepe y Moguer, disidentes, que incluían los derechos de explotación del Ciclo Integral del Agua en sus respectivos

términos municipales (aportados por la Mancomunidad Costa de Huelva a GIAHSA en desembolso de un aumento de capital) y los derechos de explotación del servicios de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, (encomendados por la Mancomunidad a GIAHSA).

- k) De esta forma, en la liquidación de la Mancomunidad Costa de Huelva se adjudicaría su patrimonio de la Mancomunidad de la siguiente forma, sujeta a su aprobación por el Pleno que lo acordara:
- A los Municipios de Lepe y Moguer, las unidades económicas susceptibles de explotación de los servicios del Ciclo Integral del Agua y de recogida de Residuos Sólidos Urbanos en sus respectivos términos municipales, más su cuota indivisa en las infraestructuras supramunicipales.
  - A los restantes Municipios de la Mancomunidad Costa de Huelva, su respectiva cuota indivisa en la acción de GIAHSA (que en conjunto sumará la totalidad de dicha acción), más su cuota indivisa en las infraestructuras supramunicipales.
- l) Así pues, los Municipios de la Mancomunidad podrían aportar los elementos patrimoniales recibidos (que incluirán la acción de GIAHSA, ya sin las unidades económicas de Lepe y Moguer) a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, tal y como lo habían acordado.

Se acompaña como **DOC. 12**, copia de la Certificación de la Secretaría del Ayuntamiento de Valverde del Camino de 19 de octubre de 2009 del acuerdo adoptado en sesión plenaria del 16 anterior, que forma parte del expediente administrativo que obra en el Procedimiento Ordinario nº 243/2010 que se sigue en el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Huelva por recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lepe contra acuerdos plenarios de MACH de 10 y 30 de diciembre de 2009.

Como puede leerse, el Pleno municipal de 16 de octubre de 2009 adoptó por mayoría absoluta legal, entre otros acuerdos:

**“6º.- Consentir expresamente que la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva aporte a GIAHSA a título de capital en el correspondiente aumento de capital, los derechos de explotación de la gestión de residuos sólidos urbanos de este Municipio, a excepción de la gestión de los residuos de vidrio (...) asumiendo los compromisos y garantías que el Pleno de la Mancomunidad acuerde frente a GIAHSA y frente a terceros a efectos de responsabilidad por la realidad y efectividad de la aportación, compromisos y garantías que expresamente podrán incluir, entre otros, el compromiso de otorgar una concesión administrativa de los derechos de explotación de tales servicios por un plazo máximo de 25 años.”**

Expuesto y acreditado lo anterior, es evidente que lo afirmado tan ligera como gratuitamente por el Ayuntamiento de Valverde del Camino en el acuerdo plenario que se impugna es absolutamente incierto. A más que, ni por asomo, resulte patente, ostensible y manifiesto que el acuerdo de 15 de noviembre de 2010 sea lesivo para el interés público y, mucho menos, que su ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, daños o perjuicios que ni se justifican, ni se acreditan por quien dice se padecen, sino que se limitan a meras alegaciones, cuando en realidad la pertenencia de Valverde del Camino a la Mancomunidad le ha reportado numerosos beneficios económicos y técnicos.

**Sexto.- Valoración de los intereses en conflicto. Prevalencia de los intereses públicos encomendados a la Mancomunidad de Servicios.**

En el Procedimiento Ordinario nº 354/2009 que se sigue ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Huelva por MACH contra acuerdo plenario del Ayuntamiento de Lepe de solicitar y llevar a efecto inmediato la separación del Ayuntamiento de la MACH, tras la tramitación del expediente de contratación para conceder a empresa privada la gestión del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración, supuesto

que guarda bastante similitud al que nos enfrentamos, el Juzgado dictó Auto en 12 de junio de 2009 concediendo la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acuerdo municipal impugnado, en cuyo fundamento jurídico quinto hizo al efecto, los siguientes razonamientos:

*"QUINTO.- En el presente caso vemos que concurren intereses públicos contrapuestos entre sí, y que existen intereses de terceros que también debe ser objeto de valoración circunstanciada, junto con los públicos de las entidades locales enfrentadas y que deben ser objeto también de protección en su caso. En ese sentido y de las alegaciones formuladas por la Mancomunidad de municipios, así como de los documentos e informes que se acompañan por la entidad recurrente (ver documento número 4 y anexos I a V), donde se recoge un informe, en el que se justifican los perjuicios que suponen para dicha entidad recurrente, la salida de dicho Ayuntamiento, en cuanto a la gestión del servicio de aguas, la depuración de aguas residuales, que viene impuesta por la normativa estatal -RD Ley 1/1995 y la normativa autonómica- Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, planos de redes de suministro afectadas, municipios afectados y régimen de financiación de la entidad mancomunada y empresa que gestiona dichos servicios públicos, así como sus operaciones financieras) y de los documentos obrantes en el expediente administrativo que se ha remitido a este Juzgado, resulta que nos encontramos con que el acuerdo municipal adoptado por el ayuntamiento de Lepe, de separarse de dicha mancomunidad y sacar a concesión los servicios mencionados para adjudicárselos a una empresa privada, ha dado lugar a una serie de recursos contencioso-administrativos, por parte de entidades públicas, concejales de la corporación local demandada, que representan a vecinos del municipio de Lepe, comité de personal de la empresa, que gestiona los servicios, sindicatos representantes de los trabajadores de dichas entidades, que nos puede llevar ya inicialmente, a un planteamiento y decisión favorables a acordar dicha suspensión de la actuación administrativa acordada y ello sin entrar en el fondo del asunto, ya que este*

*incidente cautelar no es el momento procesal oportuno para ello. Pero es que además analizando la doctrina recogida tanto en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla de fecha 22-1-2007, alegada por el Ayuntamiento demandado, como la sentencia posterior dictada por esa misma Sala de Sevilla, con fecha 7-5-2009, alegada por la entidad local recurrente ya portada también a estos autos, vemos que afirma que la separación de un Ayuntamiento de una Mancomunidad de municipios, como ocurre en nuestro caso también, constituye un derecho de dicha corporación local, sin más limitaciones que las recogidas en la LBRL y en sus Estatutos, que aquí se recoge en el artículo 27 de los Estatutos, que dispone que para la separación voluntaria de la mancomunidad de cualquiera de los municipios que la integran, será necesarios además del acuerdo de la corporación local interesada, estar al corriente del pago de sus obligaciones y deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo, lo que en el caso que estamos enjuiciando no solo, no se ha realizado por el Ayuntamiento que ha acordado la separación, sino que ni siquiera ha planteado un posible acuerdo para ello, con los perjuicios que ello puede suponer, no solo para la propia mancomunidad y los municipios que la integran, sino para la propia empresa pública que gestiona dichos servicios, que le puede obligar a una reestructuración de su organización y de las previsiones de financiación futura (ya que nos encontramos con un municipio de cierta entidad con una población importante), pues si bien se tiene el derecho a separarse, debe realizarse, cumpliendo con sus derechos y obligaciones y sin que ello deba causar perjuicios al resto de entidades locales que integran la mancomunidad y empresas que gestiona el servicio público. Pero es que además tampoco cumple el acuerdo adoptado, con el contenido del citado Estatuto, pues el acuerdo municipal, no recoge de un modo claro y concreto, quien se va a hacer cargo de la gestión de los residuos y la depuración de las aguas residuales, lo que supone*

*que se produce una separación de dicho municipio de dicha entidad asociativa, pero no llevándose la gestión de todos los servicios que había delegado en su gestión, lo que supone que la gestión de esos servicios, deberá seguir llevándose a cabo, por la Mancomunidad de municipios y la empresa pública que los gestiona, y siendo a cargo de estas últimas, los gastos que ocasione dicha prestación de recogida de residuos y la depuración de aguas residuales, con los desajuste que ello supone y la posible pérdida de subvenciones o financiación por la junta de Andalucía, que exige un tipo de entidades, para gestionar este tipo de servicios, pues el Ayuntamiento de Lepe, no ha planteado acuerdo o solución alguna al respecto, sobre el abono de esos servicios y no se recoge en sus pliegos de contratación de un modo expreso, lo que puede suponer también una futura fuente de problemas, entre dichas entidades públicas, que puede originar la suspensión del servicio y los consecuentes perjuicios a los ciudadanos usuarios de esos servicios. Además también existe otra cuestión planteada por la entidad recurrente y por la empresa que gestiona dichos servicios de abastecimiento y suministro de agua, y que puede ser otra futura fuente de conflictos, si no se llegan con anterioridad a acuerdos entre las partes sobre dicha materia, que se refiere a como se va llevar a cabo, el abastecimiento en alta del agua potabilizada, del futuro concesionario y el precio a abonar y garantía de ello, pues no se le puede imponer a la empresa pública que gestiona los servicios de abastecimiento de agua el precio de venta de agua en alta.”*

En el presente caso, el bien a proteger por su vital importancia, es la prestación efectiva de un servicio público de la transcendencia de la gestión del ciclo integral del agua, por cuanto incide directamente en la salud de la población de Valverde del Camino y del resto de municipio que integra la MAS y a los que ésta a través de GIAHSA presta dicho servicio, salud que puede verse mermada si el abastecimiento de aguas se suspende; y como bien ha quedado claro a lo largo de todo el escrito, no se restituye el mismo en un plazo brevísimo, algo que es completamente

imposible a la vista de los acuerdos adoptados entre las partes, en los que se estima un plazo de seis meses para el desalojo de los prestadores actuales del servicio y la reorganización del mismo por otra entidad diferente. Asimismo quedan afectados los intereses generales de la MAS y los municipios que la integran e incluso la falta de financiación que la actuación del Ayuntamiento provoca perjudica a todos los municipios.

Por tanto, a la vista de todo lo expuesto, la adopción de la medida cautelarísima solicitada está totalmente justificada para evitar un perjuicio del todo irreparable al conjunto de los municipios integrantes de la MAS, frente a los intereses públicos supramunicipales y municipales implicados.

La demandada tan sólo alega, que no prueba, unos hipotéticos perjuicios económicos que, en ningún caso, pueden prevalecer como ya el reseñado Auto de fecha 12 de junio de 2009 del Juzgado contencioso-administrativo número uno de Huelva, en el seno del procedimiento ordinario número 354/2009 reconoce.

**Séptimo.- Abuso de derecho. Las exigencias del principio de lealtad institucional.**

A la vista de todo lo mencionado a lo largo de este escrito, hay que indicar que son numerosos los factores e indicios que hacen sospechar de una actuación negligente, actuaciones que caen dentro del ámbito subjetivo del abuso del Derecho, recogido en el artículo 7 del Código Civil (en adelante, CC); y que por tanto, deben ser tenidas en cuenta. Dichas circunstancias son las siguientes:

- a) Obviar la existencia de un procedimiento contencioso-administrativo abierto que trata sobre la legalidad o no del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, así como si dicho acuerdo debe considerarse lesivo para los intereses del Ayuntamiento, es un signo evidente de actuación contraria a la buena fe, por cuanto dicho recurso contencioso-administrativo es la vía correcta para la impugnación de dicho acuerdo y no la pretendida con la aplicación



del artículo 103 LRJPAC, y es allí donde se deberían haberse solicitado medidas cautelares consistentes en la suspensión de la ejecución de dicho acuerdo, cosa que no se hizo, y no tratar de imponer la suspensión por la vía de los hechos una vez transcurrido un año desde la adopción del mismo, sobre todo, teniendo en cuenta que la actual Alcaldesa es la recurrente en dicho recurso contencioso-administrativo que versa sobre los mismos extremos, por lo que no puede alegar desconocimiento para hurtar al órgano jurisdiccional el pronunciamiento que le compete.

- b) GIAHSA lleva realizando dicho servicio desde hace veinte años, antes como medio propio de la MACH y actualmente de la MAS. Durante esos veinte años de concesión demanial gratuita de las redes de abastecimiento, ninguna objeción ha tenido ese Ayuntamiento de Valverde del Camino; sin embargo, en el momento en el que se establece un canon por las infraestructura y la posibilidad de capitalización de parte del mismo y con la expectativa de cobro de éste antes de 31 de diciembre de 2011, sorprendentemente es cuando realizan una reclamación antes de que tenga lugar el vencimiento de la deuda y que, por tanto, sea reclamable efectivamente, encontrándonos ante una situación artificiosa que busca la suspensión del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010 sea cual sea la forma de conseguirla, aunque sea utilizando la vía de los hechos sin acudir a la sede judicial donde se encuentran subjudice precisamente esos acuerdos.
- c) A la vista de los hechos anteriores, resulta evidente que la única razón por la que se pretende la suspensión de los Acuerdos municipales por la vía de los artículos 103 y 104 LRJPAC, es la de provocar una separación ipso facto de la MAS, sin seguir el procedimiento de separación que legal y estatutariamente se ha establecido al efecto, dejando así en una situación totalmente desfavorable a la MAS, GIAHSA y al resto de municipios que componen la Mancomunidad y saliendo por tanto indemne del

proceso de separación dicho Ayuntamiento sin hacerse cargo de todas las obligaciones que son previas y preceptivas al abandono de la MAS (artículos 76 Ley de Autonomía Local de Andalucía y 31 de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios).

- d) Es necesario poner de relieve que, en el propio acuerdo de ampliación de capital, se dejó expresa constancia del compromiso de no recuperar los servicios sin haber abonado todos y cada uno de los pagos y entregas de avales precisos, requisito indispensable para garantizar que la recuperación del servicio por un Municipio no cause perjuicio a los demás y, en definitiva, para el necesario respeto a los principios de lealtad institucional e interdicción de la arbitrariedad que los municipios mancomunados se deben recíprocamente.

Por tanto, como conclusión puede afirmarse que lo único que el Ayuntamiento pretende es la separación de dicha Mancomunidad sin seguir los cauces legalmente establecidos para poder así eludir todas las obligaciones que tanto legal como estatutariamente se le imponen, y una vez liberado de sus obligaciones poder negociar con terceros la concesión del servicio público del ciclo integral del agua, dejando una deuda considerable a la MAS que redundará en detrimento del servicio prestado al resto de municipios y, por ende, al bienestar de las poblaciones de los mismos, así con una absoluta deslealtad institucional tal y como exige el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual:

*"1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.*

*Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.”*

Resulta evidente, según lo expuesto, que dicha actuación **es claramente desleal y abusiva** pues emplea unos cauces legales que no son los correctos para obtener así un resultado que es totalmente contrario al pre-establecido por el ordenamiento jurídico, encontrándonos ante una clara situación de actuación en **fraude de ley**, así como ante una más que evidente **desviación de poder** cuyas posibles **responsabilidades no sólo administrativas sino incluso penales** deberán ser depuradas.

Por todo lo expuesto, respetuosamente,

**SUPLICA AL JUZGADO** que tenga por interpuesto el presente escrito, con los documentos que se acompañan, los admita a trámite, y conforme a sus contenidos acuerde de forma cautelarísima la suspensión del apartado tercero del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino de fecha 21 de noviembre de 2011 que inicia el procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo del Pleno Municipal de 15 de noviembre de 2010, levantando la suspensión decretada al amparo como medida provisional al amparo del artículo 104 de la LRJPAC; convocando a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 135 de la LJCA o, en su defecto, concediendo a la parte demandada audiencia por tres días para alegue lo que estime procedente sobre el mantenimiento de la medida cautelar.

**SEGUNDO OTROSÍ DICE**, que interesa se fije la cuantía del presente procedimiento en indeterminada conforme a lo dispuesto en el artículo 40 y ss. de la LJCA.

**SUPLICA AL JUZGADO**, fije como indeterminada la cuantía del presente procedimiento.

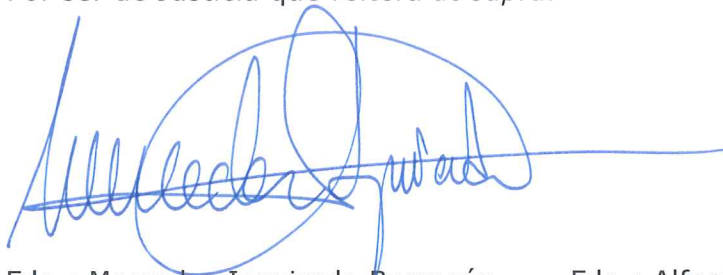
Por ser de Justicia que reitera *ut supra*.

**TERCER OTROSÍ DICE**, que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supletoriamente aplicable al presente recurso, conforme a la Disposición Final Primera de la vigente LJCA, esta

parte se compromete a subsanar cuantos defectos puedan existir en los actos procesales de la misma, por lo que,

**SUPLICA AL JUZGADO**, tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos oportunos.

Por ser de Justicia que reitera *ut supra*.



Fdo.: Mercedes Izquierdo Barragán

Fdo.: Alfonso Padilla de la Corte

Letrada colegiada nº 11.766 del ICAS    Procurador